

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Departamento de Economía

ÁREA, GRUPO O SEMINARIO

Seminario "Laboratorio CUANTI: Métodos cuantitativos en economía aplicada"

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Aplicaciones econométricas en los problemas del desarrollo

PROYECTO: N°1125

LGAC: DESARROLLO ECONÓMICO

REPORTE DE INVESTIGACIÓN

**Efectos dispares de la inclusión financiera sobre la salud y la
educación de las familias mexicanas**

Investigadores

OWEN ELI CEBALLOS MINA

CONRADO JAVIER JIMÉNEZ MÉNDEZ

Presentación

Este documento representa un avance del proyecto de investigación vigente “Financiamiento y consumo de los hogares mexicanos”, registrado ante el Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y con número de registro 1,125 ante la Coordinación Divisional de Investigación. Dicho proyecto está vinculado al programa de investigación “Aplicaciones econométricas en los problemas del desarrollo” de la Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento Desarrollo Económico, que se vincula, a su vez, al Seminario de investigación “Laboratorio Cuanti: métodos cuantitativos en economía aplicada”. Su objetivo es caracterizar y relacionar la conducta del consumo de las familias mexicanas con sus factores explicativos.

El presente reporte de investigación, “Efectos dispares de la inclusión financiera sobre la salud y la educación de las familias mexicanas”, usa modelos de variables instrumentales con datos de la ENIGH de 2018 para estimar los determinantes del gasto en salud y en educación; se identifican los efectos de la tenencia de servicios financieros formales sobre la acumulación de capital humano de los hogares. Los resultados muestran efectos positivos de la tenencia de ahorro y crédito sobre el gasto en salud y no significativos para el gasto en educación. Los efectos diferenciados a nivel regional evidencian el gran peso de las condiciones iniciales para el proceso de inclusión financiera en el país.

Dr. Sergio Cámara Izquierdo

Jefe del Departamento de Economía

Noviembre de 2020

Efectos dispares de la inclusión financiera sobre la salud y la educación de las familias mexicanas

*Owen Eli Ceballos Mina**

*Conrado Javier Jiménez Méndez***

Resumen

La literatura económica sobre el desarrollo argumenta que el acceso a servicios financieros formales representa una oportunidad de mejorar los niveles de bienestar de los más pobres y de otros grupos vulnerables. La incertidumbre que enfrentan las familias mexicanas sobre sus ingresos futuros y las expectativas sobre la política de inclusión financiera motivan los estudios acerca del financiamiento del consumo. Este capítulo estudia la relación entre la inclusión financiera y el bienestar de los hogares por medio de una revisión de los efectos de la tenencia de ahorro y crédito sobre los gastos en capital humano. Se usa información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018, para estimar modelos de los determinantes de los gastos en salud y en educación con especial atención en los efectos de la tenencia de servicios financieros formales. Se encuentran efectos diferenciados de los depósitos de ahorro, las tarjetas de crédito y de los préstamos del trabajo u otras instituciones sobre la inversión en capital humano; mientras el crédito incrementa el gasto en salud, el conjunto de depósitos de ahorro y crédito se vincula con un menor gasto en educación. También se observa que la magnitud de los efectos varía significativamente entre las regiones norte, centro y sur del país, mostrando la gran relevancia de las condiciones iniciales de cada territorio en el proceso de inclusión.

Palabras clave: inclusión financiera, bienestar, ahorro, crédito, consumo, capital humano, hogares mexicanos. JEL: C21, D12, D14, G20

* Profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Correo electrónico: oeem@azc.uam.mx.

** Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac Campus Oaxaca. Correo electrónico: conrado.jimenezme@anahuac.mx. Los autores agradecen la asistencia de investigación de Dulce María Martínez, Fernando Gamaliel Sánchez, Juan Carlos Hernández y José Eduardo Solís, colaboradores del "Laboratorio Cuanti" del Departamento de Economía de la UAM-A.

1. Introducción

Un entorno claroscuro es pintado por los indicadores socioeconómicos de México en tiempos recientes, los medios de comunicación sugieren menos corrupción / más violencia más ahorro / menos crecimiento; el nulo crecimiento económico del país en 2019 y la crisis sanitaria en el primer semestre de 2020 alimentó la incertidumbre y puso las expectativas sobre las posibilidades de una política pública que detone la reactivación del crecimiento de forma rápida y sostenida. Si bien el tema de la inclusión financiera no es prioridad de la actual administración federal, la búsqueda de estrategias que conduzcan resultados significativos para el bienestar vuelve la mirada sobre el ámbito financiero y sus posibilidades para el crecimiento y el desarrollo. Por un lado, la literatura del desarrollo argumenta que el acceso a servicios financieros representa una oportunidad de mejorar los niveles de bienestar de los más pobres y de otros grupos vulnerables (Roa, 2013; Demirguc-Kunt y Klapper, 2012; Beck, Demirgüc-Kunt y Levine, 2007; Levine, 2005); pero por otro, es evidente que dicha literatura no ha logrado identificar de forma clara los mecanismos de transmisión de los efectos positivos de la inclusión financiera sobre el desarrollo, generando un contexto en el que las acciones de política pública sobre el tema se ven limitadas.

Ante el consenso de que el desarrollo financiero y sus servicios asociados tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico y el bienestar de la población, la estrategia de política pública para la inclusión financiera es uno de los temas de mayor interés entre científicos y autoridades de la región latinoamericana (Ceballos, 2018; Alberro, Henderson, & Yúnez-Naude, 2016; Roa, 2013). El argumento central de la literatura del desarrollo financiero sugiere que mejoras en el acceso y profundización de los servicios formales tiene efectos positivos sobre la estabilización del consumo y sobre los niveles de riqueza de los hogares. En México por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2019) afirma que 49% de la población mexicana está por debajo de la línea de pobreza (más de 61 millones de personas) mientras otro 7% se encuentra en situación de vulnerabilidad por ingresos. En el contexto de las consecuencias del

posible decrecimiento económico, los alarmantes indicadores de pobreza y la gran incertidumbre que enfrentan los hogares, parece un momento propicio para preguntarse por el papel de la inclusión financiera y de los servicios financieros formales sobre los resultados de consumo y bienestar de las familias mexicanas.

Los estudios sobre el financiamiento del consumo de las familias y sus determinantes son temas del pasado, presente y futuro de la rama económica. Desde la investigación de Engel en 1857 acerca de la proporción de ingresos asignada en diferentes categorías de bienes, el consumo ha ocupado un papel protagónico como medida de bienestar de los hogares (Engel y Kneip, 1996; Medina, 1998). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015), sugiere que es posible dar seguimiento al crecimiento y al bienestar por medio de rubros relevantes de consumo como el gasto en salud, el gasto en educación, entre otros relacionados de forma directa con el desarrollo. Estos gastos conocidos en un sentido amplio como la inversión en capital humano poseen retornos inmediatos y en el porvenir de los flujos de ingresos del hogar; por ello, deben reconocerse como una estrategia de bienestar futuro y de reducción de brechas socioeconómicas entre la población (Becker y Tomes, 1986; Attanasio y Székely, 1999; Van Gameren, 2008).

Tras reconocer la importancia del consumo como medida de bienestar, cabe mencionar que varios son los determinantes que intervienen en su explicación; de forma adicional a la riqueza, el capital humano y el ciclo de vida como principales factores explicativos del comportamiento del gasto, la literatura económica también ha incorporado a los servicios financieros como elementos activos del proceso de suavización intertemporal (Demirgüç-Kunt y Klapper, 2012; Muñoz, 2004). Se argumenta que el uso de los servicios financieros formales representa la oportunidad de mejorar los niveles de bienestar de los más pobres e incluso reducir la desigualdad en favor de los grupos más vulnerables por conducto de la inversión. De forma particular, el ahorro y el crédito son presentados como las estrategias más importantes para reducir la incertidumbre sobre los flujos de ingresos de los hogares y para suavizar el consumo (Attanasio y Webber, 2010; Alessie y De Ree, 2009;

Attanasio y Székely, 2000; Villagómez y Zamudio, 2000).

México no había sido indiferente ante la relación sugerida entre inclusión financiera y bienestar; algunos años atrás los gobiernos iniciaron esfuerzos para promover y dar seguimiento a los servicios financieros. En específico, se ha impulsado la oferta de servicios financieros con acciones como la aprobación de la ley de ahorro y crédito popular para la formalización de instituciones captadoras de ahorro y colocadoras de crédito en 2001, o la aprobación en 2013 de una reforma financiera que puso entre sus objetivos bajar los costos e incrementar el acceso a productos y servicios (Rodríguez y Dorantes, 2016). La política pública mexicana se había orientado a sentar las bases de un desarrollo financiero que incorporara a la mayoría de la población; sin embargo, se debe reconocer que dicha estrategia de carácter expansivo después de varios años aún no había logrado el impacto deseado (Ceballos, 2018; Ceballos y Santiago, 2019; Woodruff y Martínez, 2009; Cotler y Rodríguez-Oreggia, 2009): aunque la penetración financiera iba en aumento, la importante brecha entre sectores menos favorecidos y los de mayores recursos se mantuvo y para la nueva administración federal dejó de ser una línea de política pública prioritaria.

En México ha habido una rápida expansión de algunos servicios financieros mediante procesos como la bancarización inducida o la misma dinámica del mercado de servicios como las tarjetas de crédito. Si bien en el 2018 más de 32% de la población del país se reportó sin acceso a servicios financieros formales, la Encuesta Nacional para la Inclusión Financiera (ENIF) anunció un incremento de más 11% de la población con tenencia de cuentas bancarias entre el 2012 y el 2018. De igual forma, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contabilizó en diciembre del 2018 cerca de 27,8 millones de tarjetas de crédito; un incremento de cerca de un millón de contratos con respecto al último cuatrimestre del 2017. Sin duda, varios servicios financieros formales han logrado la penetración entre los sectores de la población mexicana, ante lo cual la pregunta inmediata es: ¿cuál es el efecto del uso de estos servicios financieros?

Pese a la relevancia de la inclusión financiera como estrategia de desarrollo

y su auge en el ámbito nacional desde la perspectiva de política pública en administraciones previas, pocos estudios en México presentan un análisis de los mecanismos de transmisión de los efectos de la tenencia y uso de los servicios financieros formales sobre el consumo y el bienestar de los hogares. Este capítulo quiere contribuir a la identificación de mecanismos de transmisión de los efectos positivos de la inclusión sobre el bienestar por medio de una revisión de los efectos de los servicios formales de ahorro y el crédito sobre la inversión en capital humano de los hogares por regiones. Se usa información de las erogaciones financieras y del consumo de las familias disponible en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018, para estimar modelos de los determinantes del gasto en salud y educación prestando especial atención en los efectos de las variables relacionadas con la inclusión financiera. La hipótesis de este ejercicio es que las condiciones iniciales de demanda por los servicios financieros de las regiones en México son un determinante fundamental de los efectos diferenciados del proceso de inclusión financiera sobre la inversión en capital humano.

Los resultados muestran que existen efectos positivos del conjunto de instrumentos financieros de ahorro y crédito sobre el gasto en salud de los hogares, pero efectos en sentido contrario sobre el gasto en educación. Un hallazgo relevante es que estos efectos de los servicios financieros son marcadamente diferenciados entre las regiones norte, centro y sur del país, lo que demuestra la importancia de las condiciones iniciales de demanda sobre los efectos del proceso de inclusión financiera, y en particular del uso de instrumentos y servicios sobre el consumo y bienestar de los hogares en las diferentes regiones del país. Se sugiere que los distintos niveles de desarrollo, capital humano, riqueza y disponibilidad de capacidades financieras de la población determinan condiciones iniciales de las regiones que delimitan los resultados de la inclusión sobre el territorio mexicano.

Este capítulo se estructura en cinco apartados incluyendo esta introducción; en la segunda sección se hace una revisión de la literatura relacionada con el desarrollo financiero, productos, servicios y la relación con el bienestar a nivel

teórico y empírico; en el tercer apartado se hace un análisis descriptivo de la tenencia de productos de ahorro, crédito y el consumo en México a nivel regional con datos de la ENIGH 2018; en la cuarta sección se presentan modelos de determinantes del consumo del gasto en salud y en educación haciendo especial énfasis en los efectos de los depósitos de ahorro, tarjetas de crédito y créditos del trabajo para vincular la inclusión financiera con efectos sobre el bienestar; en la quinta y última sección se presentan las conclusiones y algunas reflexiones finales sobre el tema.

2. El desarrollo financiero y la estrategia de inclusión

La literatura económica sobre el desarrollo argumenta que el acceso a servicios financieros formales representa una oportunidad de mejorar los niveles de bienestar de los más pobres y de otros grupos vulnerables (Roa, 2013; Demirguc-Kunt y Klapper, 2012; Beck, Demirgüc-Kunt y Levine, 2007; Levine 2005, Alberro, Henderson y Yúnez, 2016); sin embargo, este enfoque no ha logrado dar certidumbre sobre los mecanismos de transmisión que conducen dicho potencial; más aún, los estudios empíricos sobre el tema presentan resultados en distintas direcciones cuando se trata de revisar los efectos de la inclusión financiera sobre el bienestar de los más necesitados (Ceballos, 2018; Ceballos y Santiago, 2019; Woodruff y Martínez, 2009; Cotler y Rodríguez-Oreggia, 2009). Una explicación recurrente de la relación entre desarrollo financiero y resultados sociales se centra en la idea de que la reducción de la vulnerabilidad y mejora de calidad de vida por medio del acceso a servicios financieros deviene de la posibilidad de mantener un nivel de consumo estable y de acumular activos físicos y de capital humano.

Un primer paso para estudiar la relación entre inclusión financiera y bienestar social debe distinguir entre desarrollo financiero e inclusión. Por un lado, el desarrollo financiero mide la madurez de los mercados, en relación con la solidez de las instituciones financieras, regulatorias y la sofisticación de los instrumentos y servicios financieros disponibles; por otro lado, la inclusión financiera se refiere al acceso de la población a los mencionados productos y servicios para su bienestar

(Alberro et al., 2016). El desarrollo financiero está asociado de manera positiva con el crecimiento económico; dicho efecto proviene de la reducción de fallas de mercado y costos de transacción que mejoran las oportunidades de inversión, movilización del ahorro, toma de riesgos y control corporativo. Si bien hay evidencia de que los mercados y los intermediarios financieros están asociados con mayores tasas de crecimiento y menor desigualdad socioeconómica (Demirgüç-Kunt y Levine, 2009; Levine, 2005), es relevante considerar características cualitativas como la calidad y la sustentabilidad del crecimiento que se vinculan con el desarrollo financiero; y en ese sentido es relevante el papel de la inclusión financiera.

La literatura internacional ha definido la inclusión financiera como el proceso de promover el adecuado y oportuno acceso a productos y servicios financieros regulados para contribuir al bienestar económico y a la inclusión de todos los segmentos de la población mediante la implementación de diversas estrategias que incluyen el conocimiento y la educación financiera (OCDE, 2015). Según Heimann et al. (2009), la inclusión financiera se refiere al acceso universal y continuo de la población a servicios financieros diversificados, adecuados y formales, así como a la posibilidad de su uso conforme a las necesidades para contribuir al desarrollo y al bienestar de los usuarios. En este sentido, la teoría del desarrollo financiero ha hecho mucho énfasis en que la inclusión financiera debe fundamentarse en cuatro dimensiones: i) acceso a los servicios; ii) uso de los servicios; iii) la calidad de los servicios; y iv) el bienestar de la población que usa los servicios financieros (Alianza para la Inclusión Financiera, 2011).

En resumen, la inclusión financiera es esa condición en la cual toda persona que lo desee puede hacer uso de servicios financieros de calidad proporcionados por la banca a precios accesibles y de manera digna para acceder a la inclusión económica y al bienestar social. Es relevante considerar que los resultados sobre el bienestar económico y social de la población derivados de este proceso de desarrollo no se obtienen de manera directa y se refieren en términos potenciales; en particular, según la hipótesis de este capítulo, dichos beneficios sobre el bienestar dependen de la adecuación del proceso de inclusión a cada territorio y

población según las condiciones iniciales, sociodemográficas, económicas y culturales. Bajo esta idea, los avances que otorga la inclusión financiera en el mediano y largo plazo deberían conducir al incremento del capital humano, al empoderamiento de la mujer, a una reducción en la desigualdad, entre otras mejoras en el bienestar (De Olloqui, Andrade y Herrera, 2015).

Un mayor acceso a la infraestructura de servicios y productos financieros, una disminución de barreras de adquisición o contratación de servicios, la protección del consumidor, la transparencia de la información y una mejor educación financiera, juegan un papel fundamental para que el potencial de los servicios financieros formales sea desplegado sobre la mejora del bienestar y la calidad de vida de las familias. Para extraer los beneficios procedentes del desarrollo financiero, la estrategia de inclusión en nuestro país parece haberse centrado en la expansión de la oferta de servicios; sin embargo, dado que la teoría sugiere que los beneficios son potenciales, para poder acceder a los mencionados efectos positivos sería estratégico identificar cuáles son los mecanismos que intervienen para el mejor proceso de inclusión. Algo claro de inicio es que, para la adecuación del proceso de inclusión financiera, no basta con centrar las estrategias del lado de la oferta expansiva de servicios; también es absolutamente necesario tomar en cuenta los factores de demanda que están permeados por las condiciones iniciales de las regiones en cada país, y especialmente en uno tan diverso como México.

Un adecuado proceso de inclusión financiera debe considerar los elementos desde el lado de la oferta y la demanda, pero sobre todo considerar las distintas condiciones de inicio de cada población objetivo según sus características económicas, sociodemográficas y culturales. Este capítulo argumenta que, para promover el acceso, el uso, la calidad y el bienestar derivado de los servicios financieros, del lado de la oferta se necesita garantizar la provisión de los servicios y productos financieros en un ámbito competitivo y regulado, pero especialmente focalizado (productos adecuados). La perspectiva de oferta de los servicios financieros es la más trabajada en el contexto de inclusión del país, pero la estrategia expansiva de estos servicios no es suficiente para llevar a cabo un buen

proceso de inclusión. Los elementos del lado de la demanda propuestos en la figura 1 son indispensables para los objetivos deseados y cabe mencionar que, en México los avances en términos de acceso a la tecnología, información, capacidades y alfabetismo financiero presentan un rezago importante y una distribución desigual sobre el territorio (Rodríguez y Dorantes, 2016; Holzmann, Mulaj & Perotti, 2013).

Figura 1
Determinantes del proceso de inclusión financiera



Fuente: elaboración propia

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 indican que más de 52 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza por ingresos y 8.6 millones adicionales son vulnerables a dicho fenómeno en nuestro país; es decir, cerca de 49% de la población mexicana enfrentaba problemas de pobreza por ingresos, y aunque en términos relativos la proporción de pobreza parece estable desde hace 10 años, en términos absolutos la pobreza incrementó en más de 6 millones de personas. Con la pobreza multidimensional la situación no es muy distinta; una gran proporción de

la población mexicana presenta rezago educativo, no tiene acceso a servicios de salud, seguridad social, servicios básicos en la vivienda o presenta carencias alimentarias. Bajo la perspectiva de las estrategias de reducción del fenómeno de la pobreza, economistas como Banerjee & Duflo (2011) consideran la inclusión financiera como ese empujón necesario que puede generar diferencias en las condiciones de vida de las familias vulnerables.

La inclusión financiera ha tomado gran relevancia como estrategia internacional y de manera especial en los países en desarrollo; organizaciones internacionales como el G20, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), han puesto el tema entre sus prioridades de recomendación de política pública; esto bajo la inherente posibilidad de que la estrategia de inclusión brinde a las familias más necesitadas condiciones para solventar gastos de subsistencia o básicos como la salud o la educación por medio del crédito y el ahorro (De Olloqui et al., 2015). Desde esta perspectiva, la relación entre los servicios financieros y la reducción de la pobreza se da por medio de la protección y previsión de situaciones inesperadas usando ahorro precautorio o créditos de emergencia; bajo esta idea, los niveles de vulnerabilidad disminuyen mientras en simultáneo el progreso social y económico es impulsado por la política inclusión financiera (Cull et al., 2014).

Las familias con escasos recursos que laboran desde la informalidad podrían verse beneficiados por medio de los servicios financieros; estos servicios les permiten acceder a recursos adicionales que serán destinados al consumo, al bienestar y a estrategias productivas que mejoren sus niveles de riqueza (Rodríguez & Riaño, 2016; Cull et al., 2014). Enfoques del desarrollo financiero sugieren que como base de la estrategia de inclusión, es necesario que los gobiernos o autoridades otorguen a los ciudadanos un piso mínimo de activos que permita el acceso a los mercados por medio del ahorro, la acumulación y movilización de su capital humano para poder incrementar los ingresos; es decir, deben existir unas condiciones iniciales mínimas para que ocurra el proceso de inclusión y sus resultados (Williamson, 2003; Bernal, 2007). Sin embargo, no todos los caminos

conducen al bienestar bajo la inclusión; autores como Adams (1988) y Adams y Von Pischke (1992) prevén que familias mediante una inclusión financiera inadecuada pueden verse envueltas en una trampa de la pobreza; para el grupo de hogares con menor nivel de ingresos y sin las condiciones iniciales mínimas necesarias para la inclusión, el acceso al crédito representa un riesgo y una posible carga adicional (Guízar et al., 2016).

2.1. Financiamiento del consumo de los hogares

El consumo de los individuos y las familias son elemento esencial del bienestar humano; el ciclo de vida (MCV) de Modigliani y Brumberg (1954) y la hipótesis del ingreso permanente (HIP) de Friedman (1957), son marcos teóricos seminales en los estudios sobre el financiamiento del consumo y los temas de bienestar de la población. Desde este conjunto de antecedentes primarios de la literatura económica se ha consensuado que el ahorro y el crédito son variables fundamentales de las estrategias de financiamiento, reducción de la incertidumbre y suavización del consumo de las personas y los hogares (Aportela, 2001, 1999; Beck, Demirgüç-Kunt, y Levine, 2007; Demirgüç-Kunt, Beck y Honohan, 2008; Levine, 2005; Morfín, 2009; Vonderlack y Schreiner, 2001; Castellanos y Garrido 2010; entre otros). La idea central es que el consumidor maximiza una función de bienestar que depende de su consumo presente y futuro, sujeto a una restricción de riqueza en función de una dotación inicial y de sus ingresos esperados (Liquitaya, 2011).

El MCV plantea que las personas mantienen estable el comportamiento del consumo a lo largo de su trayecto de vida dado los niveles de ingresos que poseen; es decir, dependiendo de la fase del ciclo de vida los agentes buscan suavizar el consumo, siendo ahorradores durante el periodo productivo y desahorradores durante el retiro; sin embargo, esta hipótesis teórica presenta problemas para su prueba empírica porque supone que hay perfecta movilidad de capitales y que no existen costos de transferir recursos de un punto del ciclo de vida a otro (Browning y Lusardi, 1996). En general, los estudios empíricos sobre el tema apuntan a la no suavización del consumo; por ejemplo, Sandoval-Hernandez (2013), Campos y

Meléndez (2013) y Mejía (2008), plantean que la no suavización en México puede estar explicada en las restricciones de liquidez y de acceso a los servicios financieros que enfrentan las personas y sus familias. Esto sugiere que una estrategia exitosa de inclusión financiera en el país puede traer efectos positivos si partimos de la validez teórica de la hipótesis del MCV.

Pero aún bajo este contexto teórico, varias cuestiones quedan por resolver sobre los posibles beneficios de la estrategia de inclusión financiera en el país; habría que preguntarse qué sugiere la literatura acerca de las variables que determinan la tenencia de servicios financieros; y más importante, cuáles son los efectos de la tenencia de estos servicios sobre el bienestar de las personas que los poseen. Sobre los determinantes de los servicios financieros se sugiere que características demográficas, económicas, territoriales y socioculturales representadas en variables como la edad, el nivel de educación, la riqueza, la localización geográfica o la tecnología, determinan las posibilidades de acceso a los mencionados servicios (Ceballos y Santiago, 2019; Rodríguez y Riaño, 2016; Castellanos y Garrido, 2010). Con respecto a la segunda inquietud y los efectos de la inclusión sobre el bienestar, varios autores como Villarreal (2014), Galor y Zeira (1993), Becker y Tomes (1986), entre otros, plantean que dichos efectos positivos son conducidos por medio de la inversión en capital humano, tal que con el acceso a servicios financieros se espera no sólo un beneficio inmediato, sino un retorno futuro que conduce a la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

En el caso mexicano Castellanos y Garrido (2010) muestran que los hogares con mayores ingresos y mayor escolaridad del jefe de familia concentran tarjetas de crédito de tipo comercial y bancarias, mientras familias con menores recursos usan tarjetas de tiendas departamentales con mayor frecuencia. También identifican que del 7% de hogares que cuentan con tarjeta de crédito, poco más de un tercio lo destinan a bienes duraderos y concluyen que la adquisición de bienes durables por medio de tarjetas de crédito es baja. Ceballos y Santiago (2019) sobre el efecto de las tarjetas de crédito en el consumo concluyen que dichos instrumentos financieros poseen efectos diferenciados dependiendo del tipo de bien y del nivel de riqueza

del hogar; en particular, sugieren que hay efectos positivos de las tarjetas de crédito en los gastos en salud y en los bienes menos básicos; encuentran que dichos efectos son mayores en la parte alta de la distribución de ingresos y que en la parte baja los hogares tienden a pagar más intereses por el uso de las tarjetas de crédito.

El contexto de inclusión financiera en el país se ha conducido desde una estrategia expansiva con acelerados procesos de bancarización y oferta mediante corresponsales bancarios, pero no parece haber tomado en cuenta las condiciones iniciales de los territorios y la población; parece que han sido menos importantes los factores del lado de la demanda para las autoridades. Desde la perspectiva de política pública el proceso es conducido por una estrategia que concentra sus esfuerzos mediante el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF)¹; dicho Consejo interinstitucional constituido desde el 2011, tiene por objeto establecer las condiciones para promover la competencia, la provisión de acceso financiero sostenible, la innovación y la protección del consumidor. Pese a que sus objetivos se organizan en el marco de una definición de inclusión que resalta elementos del lado de demanda como la educación y las capacidades financieras, en la práctica sin duda las carencias sobre el tomar en cuenta la población objetivo y sus condiciones iniciales se mantienen².

Entre 2012 y 2018 la ENIF reporta avances en la provisión y acceso a servicios formales con un incremento de 56 a 68% de la población con algún servicio o producto financiero. En términos de promoción de la competencia y regulación, la reforma de 2013 es un avance; pero pese al intento por incorporar el tema de las capacidades financieras y de educación, el diagnóstico no tiene muchos avances que reportar desde el ámbito de la creación de una cultura financiera. La responsabilidad de los elementos del lado de la demanda ha recaído sobre el comité

¹ El CONAIF está integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), la Tesorería de la Federación, la Comisión Nacional de Seguros Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de los Servicios Financiero (CONDUSEF), la CNBV y la CONSAR.

² "...la inclusión financiera comprende el acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población..." Diario Oficial de la Federación, octubre 10 de 2011.

de educación financiera y en la CONDUSEF; en el comité se discute la incorporación de programas de educación financiera en la educación básica obligatoria del país, mientras la CONDUSEF implementa estrategias de promoción como la semana de educación financiera, una revista y una página web sobre el tema. A pesar de los esfuerzos, el poco avance hacia la creación de una cultura financiera se refleja en el control de gastos y el manejo de las finanzas personales de la población.

Según la ENIF 2018 sólo 35% de la población adulta lleva un registro de sus gastos; más aún, sólo alrededor de 11% de la población total lleva su registro en papel o de forma digital, mientras el 26% restante -que dice llevar un registro- sólo lo hace mentalmente. Sólo alrededor de un 30% de la población compara las ventajas de sus productos financieros antes de adquirirlos, mientras que únicamente 40% de la población con productos de crédito tiene la capacidad de calcular los intereses que estos generan. Tomando en cuenta que 42% de la población adulta en México en 2018 reportaba la insuficiencia de su ingreso para cubrir sus gastos, no cabe duda de que el panorama de capacidades financieras en el país es uno de los temas con más necesidades de trabajo en el tema de inclusión.

La literatura sobre inclusión y servicios financieros en México identifica que sólo algunos instrumentos como las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito han logrado difundirse a lo largo y ancho del territorio; sin embargo, dadas las capacidades financieras en el país instrumentos como las tarjetas de crédito pueden convertirse en riesgos financieros antes que generar los beneficios esperados para la población. Ponce, Seira y Zamarripa (2017), encuentran que quienes tienen tarjetas de crédito pagan 31% adicional de su costo mínimo de financiamiento; en general, los datos son indicativos de la baja capacidad y cultura financiera del país que se acentúa por regiones y que delimitan las condiciones iniciales del proceso de inclusión. En este capítulo, se plantea la hipótesis de que los efectos positivos de los servicios financieros sobre el bienestar dependen de las condiciones iniciales de los individuos y las familias, de modo que son diferentes a lo largo y ancho del territorio nacional según la región.

3. Servicios financieros y consumo en la ENIGH 2018

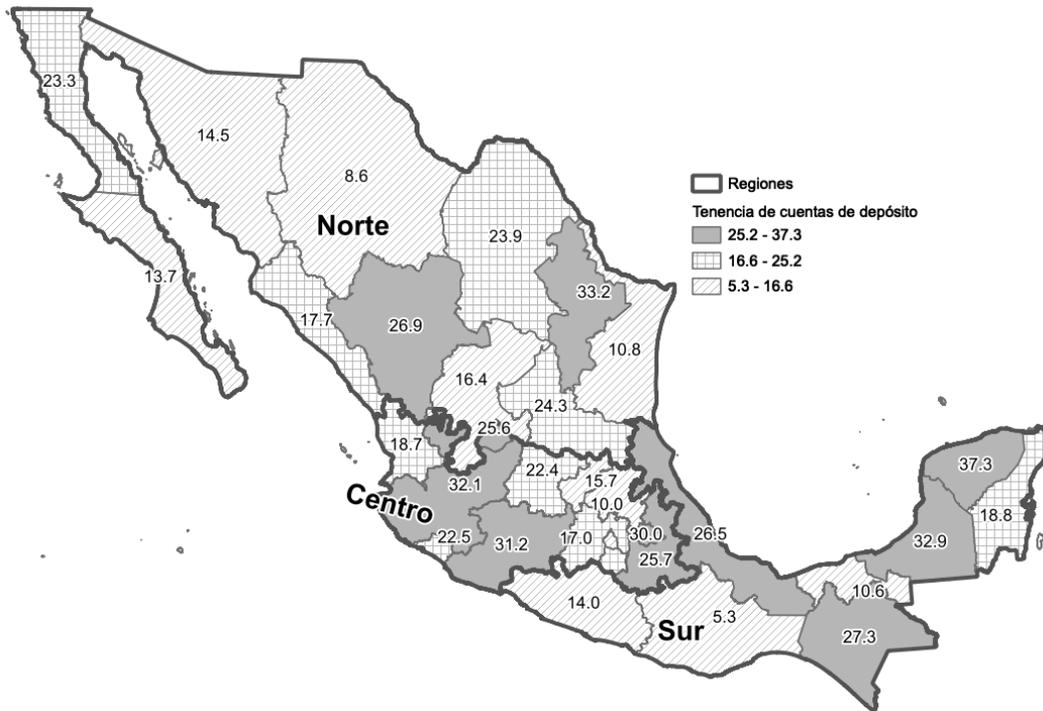
En esta sección se presenta un conjunto de descriptivos a nivel regional sobre la tenencia y uso de servicios financieros dividiendo el país en norte, centro y sur.³ Al analizar el uso y monto promedio de las cuentas de depósito, tarjeta de crédito y créditos de trabajo a nivel de entidades federativas usando la ENIGH 2018, se identifica que no existe un patrón geográfico homogéneo transversal para los tres servicios financieros; sin embargo, es posible identificar un comportamiento diferenciado tanto en la tenencia de servicios como en las características sociodemográficas por regiones. En principio se presentan tres mapas de la tenencia de los servicios y tres gráficas de correlaciones entre la tenencia y los montos medios de los servicios financieros analizados; después, se presenta una caracterización sociodemográfica por regiones para relacionar con la tenencia y uso de las cuentas de depósitos de ahorro, tarjetas de crédito y créditos del trabajo.

En el caso de las cuentas de depósito, como se muestra en el mapa 1, las entidades del sur y centro del país reportaron un uso más alto que las entidades del norte; sin embargo, los montos promedios de depósitos son más altos en la región norte. Es probable que procesos de bancarización acelerados conducidos por los pagos de programas sociales en el sur y centro del país impulsen la tenencia de este tipo de servicio financiero formal en estas regiones. Destacan los estados de Nuevo León, Yucatán, Campeche, Jalisco y Michoacán tanto en el porcentaje de hogares que reportaron uso de cuentas de depósito como en el monto promedio. Un punto por tomar en cuenta es que las cuentas de depósito de ahorro son el único instrumento analizado que muestra una correlación positiva y significativa entre su uso y el monto promedio a nivel de entidad; es decir, las entidades que más cuentas de depósitos reportan son también las que reportan los montos promedio más altos en dichas cuentas.

³ En este capítulo se divide el país en tres regiones así; (Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas); (Centro: Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro y Tlaxcala); (Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán)

Mapa 1.

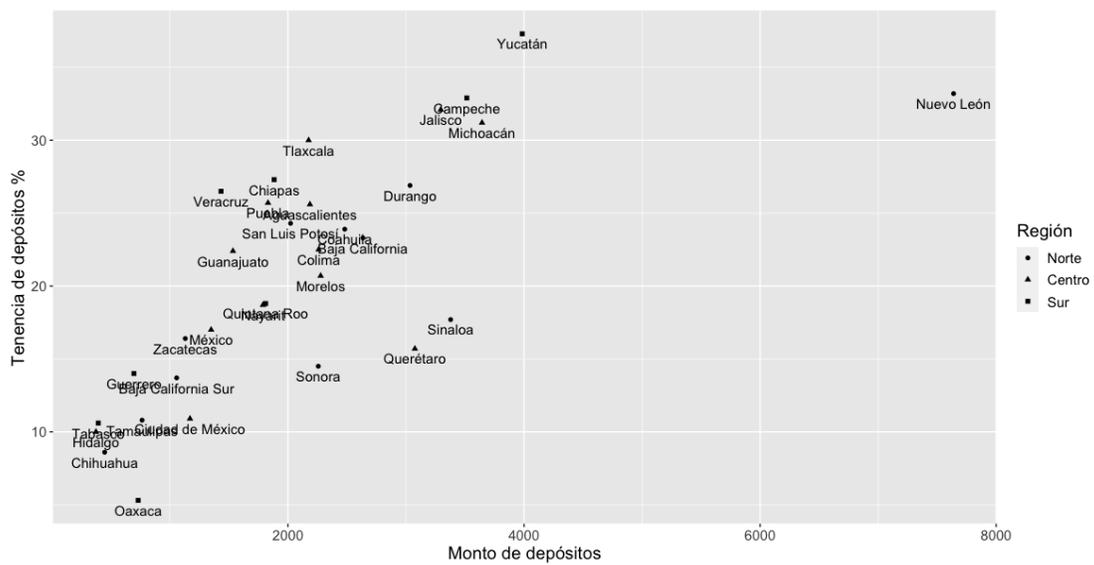
Tenencia de cuentas de depósito por entidad federativa en 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Gráfica 1

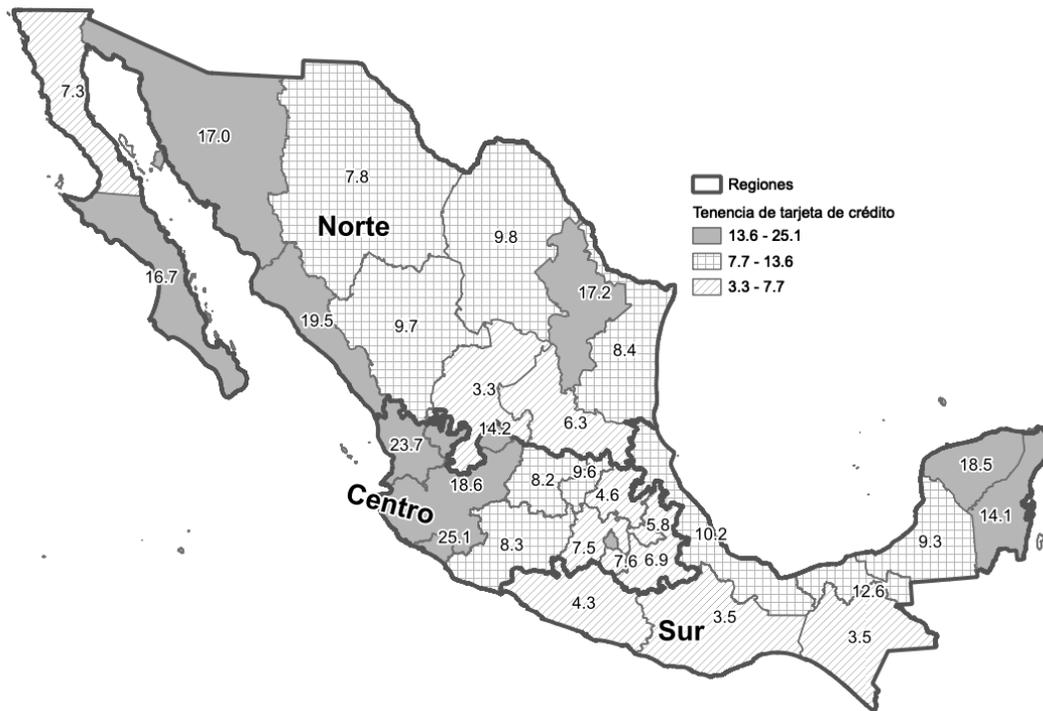
Tenencia y monto de cuentas de depósito por entidad federativa en 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Mapa 2

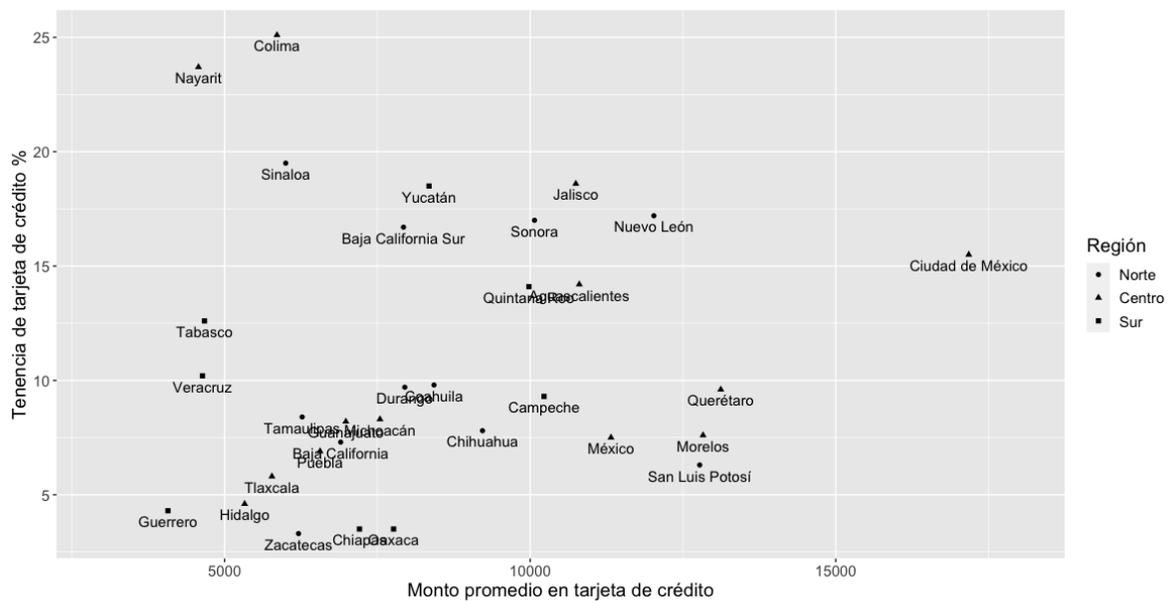
Tenencia de tarjetas de crédito por entidad federativa en 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Gráfica 2

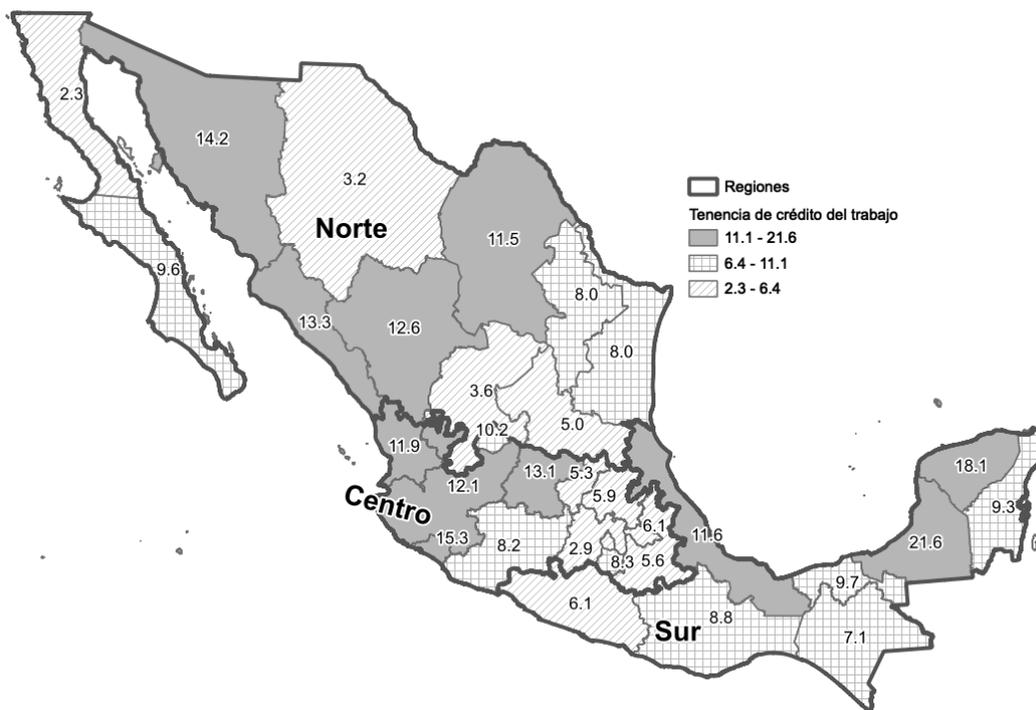
Tenencia y montos de tarjetas de crédito por entidad federativa en 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Mapa 3

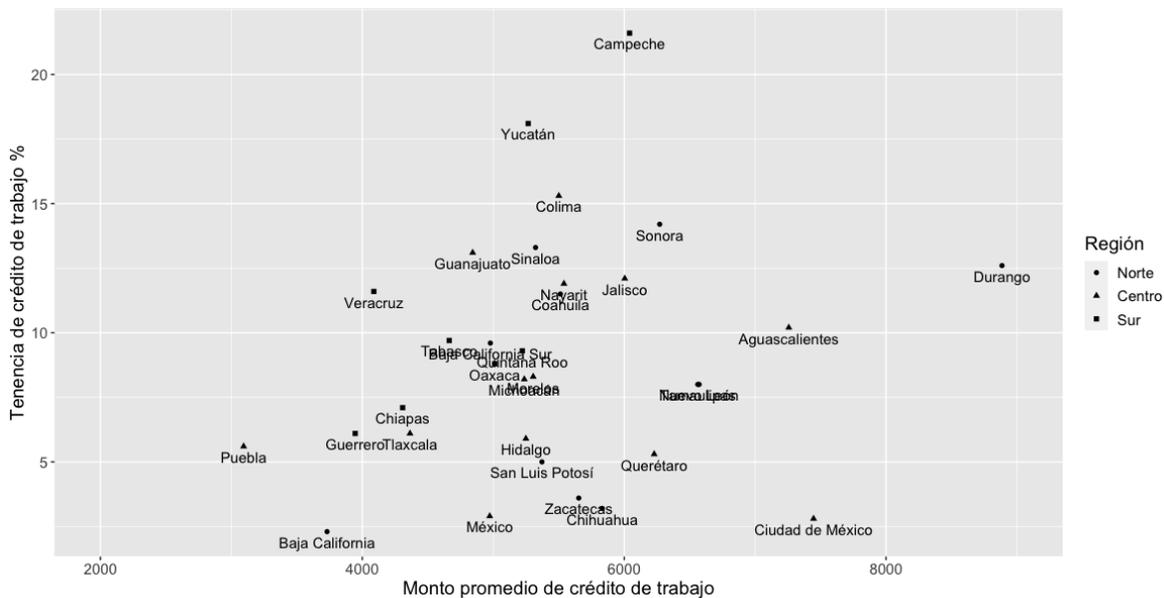
Tenencia de créditos del trabajo por entidad federativa en 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Gráfica 3

Tenencia y montos de créditos del trabajo por entidad federativa en 2018



Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Las regiones norte y centro del país reportan las entidades con mayor tenencia y uso de tarjetas de crédito; en el sur, Yucatán y Quintana Roo son los estados con mayor presencia de este servicio financiero formal. Los promedios más altos del gasto con tarjetas de crédito se encuentran principalmente en la región centro, destacando la CDMX con un monto de pago promedio trimestral de \$17,177. Entre las entidades que resaltan en el mapa 2 también aparecen Colima y Nayarit, que reportaron respectivamente que 25.1% y 23.7% del total de sus hogares usan tarjetas de crédito, aunque con montos de gasto promedio relativamente bajos frente al resto del país. No se identifica una correlación significativa entre el porcentaje de hogares que reportaron el uso de una tarjeta de crédito y el monto promedio de gasto por entidades. A nivel regional, la mayor tenencia y uso del servicio en el norte y el centro, así como el mayor monto promedio en el centro denota el comportamiento territorial de este servicio financiero formal. El mapa 3 muestra que las entidades con mayor proporción de créditos laborales se encuentran distribuidas sin un patrón particular sobre las tres regiones; sin embargo, los montos promedio más altos de créditos laborales se concentran en el norte, mientras en el sur se solicitan los montos más bajos. En cuanto a los servicios de crédito, en general las regiones norte y centro del país tienen mayor tenencia, uso y monto promedio de este tipo de servicios a diferencia del comportamiento de las cuentas de depósitos de ahorro.

La regionalización utilizada como marco de análisis en este capítulo sólo consideró la posición y cercanía geográfica en su definición, no obstante, al analizar las variables sociodemográficas se identifican características diferenciadas en cada una de estas regiones, por lo cual consideramos que esta clasificación es una variable proxy adecuada a las condiciones iniciales. La tabla 1 presenta los descriptivos en términos sociodemográficos para cada región con base en la información de la ENIGH 2018. En términos demográficos, la educación del jefe del hogar es el principal diferenciador entre regiones: las entidades del norte y centro con 9.1 y 8.9 años de educación reportan valores significativamente mayores a los del sur con sólo 7.5 años promedio de escolaridad; además, la región sur concentra el mayor porcentaje de hogares con jefes sin instrucción educativa y con menores

de 12 años. Por otro lado, la región centro destaca por concentrar una mayor proporción de hogares con jefatura femenina.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), permiten a los hogares mantenerse informados y comunicados, además de ser en la actualidad un medio adicional de consumo de educación, por ello son un indicador relevante de las capacidades financieras de los hogares. Con excepción de la telefonía fija, en los últimos años ha existido una tendencia positiva en el acceso a las TIC en los hogares mexicanos, pero pese a la tendencia positiva, las diferencias regionales son sustanciales, en especial entre el norte y el sur del país; por ejemplo, existen más de 20 puntos porcentuales de diferencia en el acceso de los hogares a una conexión de internet y más de 10 puntos de diferencia en el acceso a telefonía móvil entre estas regiones. La región centro muestra niveles intermedios en los indicadores calculados para las TIC, con excepción de la telefonía fija donde muestra la mayor tasa. A nivel nacional, destaca la aún baja cobertura de internet en los hogares (40.3%). Otra característica que también se observa es que existe una marcada diferencia en la proporción de hogares rurales para estas regiones; en particular, el sur del país posee el doble de hogares rurales frente a los hogares del norte y el centro.

Tabla 1

Características sociodemográficas de los hogares mexicanos por región en 2018

Variable	Región		Norte	Centro	Sur	Nacional
Demográficas	Edad del jefe	<i>Años</i>	49.7	50.1	49.5	49.8
	Educación del jefe	<i>Años</i>	9.1	8.9	7.5	8.7
	Jefes de hogar sin instrucción	%	4.1%	5.9%	11.8%	6.7%
	Jefes de hogar mujer	%	27.3%	29.7%	28.1%	28.7%
	Hogares con menores de 12 años	%	42.4%	43.6%	47.7%	44.2%

	Hogares con mayores de 65 años	%	22.6%	23.3%	23.0%	23.0%
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el hogar	Teléfono celular	%	89.2%	87.5%	79.2%	86.1%
	Televisión de paga	%	47.1%	40.9%	39.0%	42.1%
	Conexión a Internet	%	46.5%	43.3%	26.0%	40.3%
	Línea telefónica fija	%	36.3%	40.0%	20.4%	34.5%
	Computadora	%	29.5%	30.2%	17.9%	27.2%
Geográfica	Hogares rurales	%	16.9%	19.1%	39.4%	23.1%
Hogares			29,167	29,289	16,191	74,647

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

En general, la tabla 1 muestra que los hogares de la región sur presentan un mayor rezago de las características sociodemográficas analizadas frente al norte y al centro; en particular, la acumulación de capital humano y de las TIC en franca relación con las capacidades financieras y el acceso a productos y servicios, dan un primer acercamiento a las condiciones regionales para los procesos de inclusión a nivel regional.

La tabla 2 presenta la distribución de los servicios financieros a nivel agregado por región, alrededor de la tasa de uso y el monto promedio reportado. En el caso de las cuentas de depósito, no existen diferencias significativas en la proporción de uso entre el norte y el centro del país (20% y 20.7% respectivamente), mientras los hogares del sur reportaron una tasa ligeramente mayor (21.2%); sin embargo, en cuanto al monto de depósitos promedio las diferencias son sustanciales; los hogares del norte reportaron un monto por encima de la media nacional, los del centro un valor cercano a la media y los del sur un monto promedio por debajo. A nivel nacional, 10.5% de los hogares utilizaron al menos una tarjeta de crédito; la jerarquía norte, centro y sur se repite en la proporción de uso de este instrumento financiero. En tanto, en el monto de crédito utilizado, destaca la región centro con el promedio más alto (\$11,080).

Tabla 2
Características de los hogares mexicanos por región en 2018
Servicios financieros y consumo

Región		Norte	Centro	Sur	Nacional
Depósitos	%	20.0%	20.7%	21.2%	20.6%
	<i>Monto</i>	2,823	1,903	1,513	2,133
Tarjeta de crédito	%	11.5%	10.9%	8.4%	10.5%
	<i>Monto</i>	9,034	11,080	6,378	8,415
Préstamo del trabajo	%	8.0%	6.6%	10.3%	7.8%
	<i>Monto</i>	6,118	5,387	4,624	5,446
Gasto en salud	%	46.7%	54.3%	61.1%	53.8%
	<i>Monto</i>	1,793	1,579	1,302	1,558
Gasto en educación	%	39.9%	46.5%	45.9%	44.6%
	<i>Monto</i>	6,642	6,823	4,069	6,136
Hogares		29,167	29,289	16,191	74,647

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Una proporción mayor de hogares del sur del país recibieron un préstamo de su trabajo (10.3%), pero los montos entregados fueron, en promedio, los más bajos (\$4,624). En el norte, en cambio, se entregaron los montos de préstamo más alto (\$6,118). Por otro lado, la proporción de hogares que reportaron gastos en salud sigue un patrón inverso al de la mayoría de las variables analizadas: la región sur muestra el indicador más alto (61%), seguido del centro (54.3%) y norte (46.7%); esto puede ser reflejo de las diferencias de acceso a los servicios de salud públicos que existen en cada región. Sin embargo, el monto de gasto promedio en salud es congruente con la jerarquía de los servicios financieros en la que la región norte reportó el monto más alto (\$1,793) y el sur el más bajo (\$1,302). En cuanto al gasto en educación, la región centro concentra tanto la mayor proporción de hogares que reportaron este gasto (46.5%), como el mayor monto promedio (\$6,823). Aunque la región sur reportó una proporción cercana de hogares con gasto en educación (45.9%), el monto promedio fue significativamente menor (\$4,069). Los montos de

gasto promedio en salud y educación son estadísticamente diferentes en todas las regiones.

Tabla 3
Gastos en capital humano y uso de servicios financieros
México por regiones en 2018

Variable	Región	Gasto en salud			Gasto en educación		
		Con servicio financiero	Sin servicio financiero	Prueba t	Con servicio financiero	Sin servicio financiero	Prueba t
Depósitos	Norte	2,303	1,642	2.42**	7,713	6,348	4.40***
	Centro	1,709	1,539	2.74**	7,076	6,752	2.43**
	Sur	1,662	1,191	2.90**	4,870	3,831	4.99***
	Naciona						
	I	1,833	1,474	4.56***	6,691	5,979	5.99***
Tarjeta de crédito	Norte	3,227	1,517	6.99***	11,890	5,774	18.66**
	Centro	2,999	1,340	12.07**	14,550	5,709	20.42**
	Sur	2,572	1,158	6.36***	7,452	3,669	16.08**
	Naciona			14.59**			31.88**
	I	2,980	1,331	*	12,421	5,238	*
Crédito del trabajo	Norte	2,966	1,655	5.09***	7,225	6,574	1.86*
	Centro	1,872	1,551	1.38	6,142	6,882	0.23
	Sur	1,881	1,222	2.97**	4,271	4,039	1.95*
	Naciona						
I	2,145	1,493	5.55***	5,853	6,166	1.02	

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Finalmente, la tabla 3 muestra que existen diferencias estadísticamente significativas en el gasto promedio en salud y educación entre los hogares que utilizaron o no servicios financieros. Estas diferencias se mantienen a nivel de región, con excepción de los hogares del centro del país que ejercieron un crédito del trabajo.

4. Efectos de los depósitos de ahorro y el crédito sobre los gastos en salud y educación

4.1. Estrategia de identificación

La estrategia de modelaje econométrico para estimar los efectos de la tenencia de servicios financieros formales sobre el capital humano para el total del país y las regiones norte, centro y sur, con la ENIGH 2018, centra su identificación en una función de determinantes del gasto en salud y en educación que incorpora factores sociodemográficos, económicos y en particular, la tenencia de cuenta de depósitos de ahorros, tarjeta de crédito o un préstamo de su trabajo u otra institución así:

$$y_i = \alpha + \gamma F_i + \beta X_i + u_i \quad (1)$$

Donde y_i es el logaritmo del gasto en salud o en educación del hogar i ; F_i es variable aleatoria que corresponde a la tenencia de depósitos de ahorro, tenencia de tarjeta de crédito o la tenencia de crédito por parte del trabajo; X_i es vector de otros factores económicos y sociodemográficos de los hogares presentados de forma explícita en la tabla 4; y γ es parámetro de interés que mide el efecto del servicio financiero sobre el consumo en salud o educación.

La ecuación (1) de los determinantes del consumo en salud y en educación será estimada por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y mínimos cuadrados bivariados (VI-MC2E) usando como instrumentos variables relacionadas con el acceso físico a los servicios, los conocimientos financieros y con algunos aspectos demográficos, tal como se indica en la tabla 4.

Tabla 4

Efectos de los servicios financieros sobre los gastos en salud y en educación

Especificación del modelo: variables, controles e instrumentos

Variables dependientes:		
<i>Gasto en salud o en educación (y_i)</i>		
Conjunto de determinantes	Variables explicativas y controles	Variables instrumentales
<i>Servicios financieros (F_i)</i>	Cuenta de depósitos Tarjeta de crédito Crédito del trabajo	Jefe con educación preparatoria o más Tamaño de localidad Uso de internet Adultos mayores en casa
<i>Riqueza y capital humano (X_i)</i>	Ingreso corriente y gasto monetario Años de educación del jefe de hogar	
<i>Ciclo de vida familiar (X_i)</i>	Edad del jefe de hogar Tamaño de hogar Menores de 12 años	
<i>Otros controles (X_i)</i>	Sexo del jefe de hogar Localización urbana/rural Frontera Sur	

Fuente: elaboración propia

El problema de identificación que se enfrenta al estimar los efectos de los servicios financieros formales sobre el consumo de capital humano es que, dadas las

características de los hogares, la tenencia de depósitos, tarjeta de crédito u otro tipo de crédito personal es una decisión endógena. Imagine que familias con buenas expectativas sobre sus flujos de ingreso deciden tener una cuenta de depósitos, tarjeta de crédito o pedir un crédito; dichas expectativas no son directamente observables y a su vez generan cambios en el consumo; en este caso, la variable explicativa no cumple con el supuesto de exogeneidad necesario para estimar por MCO el modelo lineal clásico. Como sugiere Angrist (2001), una solución a este problema es el uso de variables instrumentales para estimar el efecto causal de la variable explicativa.

El reto es encontrar un conjunto de variables que sean buenas explicando la tenencia del servicio financiero (primera etapa del modelo), pero que no afecten de forma directa el gasto en salud o en educación de los hogares (segunda etapa); por ejemplo, Villarreal (2014) sugiere que la tenencia y uso de servicios financieros se asocia con las posibilidades de acceso físico, con los conocimientos financieros y con algunos aspectos demográficos. En este capítulo se usan como instrumentos, una variable indicadora de nivel preparatorio o más del jefe de hogar, el tamaño de localidad, el número de adultos mayores en el hogar y el acceso a internet. En localidades más grandes con mayor infraestructura bancaria existe mayor acceso físico a los servicios financieros. La variable indicadora de educación representa un umbral mínimo de capital humano vinculado con algunos conocimientos financieros básicos; el número de adultos mayores en el hogar representa la afinidad demográfica de la familia con los servicios financieros; y el acceso a internet representa la cercanía a la innovación y el acceso a servicios del hogar.

4.2. Resultados

Las estimaciones de este capítulo evidencian resultados en dos direcciones que se confirman y se retroalimentan bajo los componentes de la estrategia de identificación. Por un lado, se evidencian efectos positivos del conjunto de instrumentos financieros de ahorro y crédito sobre el gasto en salud de los hogares, pero efectos en sentido contrario sobre el gasto en educación. Por otro

lado, dichos efectos de los servicios financieros son marcadamente diferenciados entre las tres regiones que se controlan en este ejercicio, demostrando la importancia de las condiciones iniciales de demanda sobre el territorio. Las tablas 5 y 6 respectivamente presentan las estimaciones por MCO de los modelos de determinantes del gasto en salud y en educación de los hogares para el promedio nacional y las regiones norte, centro y sur del país, haciendo énfasis en los efectos de la tenencia de cuentas de depósitos, tarjeta de crédito o crédito del trabajo como servicios financieros formales, y controlando de forma adicional por características sociodemográficas, económicas y territoriales de los hogares. Las tablas 7 y 8 replican el ejercicio de los determinantes del gasto en salud y educación, pero con estimaciones bietápicas instrumentando los servicios financieros formales para verificar sus efectos.

Las estimaciones por MCO de la tabla 5 indican que la tenencia de tarjeta de crédito o de crédito por parte del trabajo u otra institución incrementa entre 7.4 y cerca de 10 puntos porcentuales el gasto en salud de los hogares en el promedio nacional; dichos efectos positivos son conducidos principalmente por los impactos del crédito en el centro y sur del país, mientras que en la región norte, al igual que ocurre con la tenencia de cuentas de depósitos, ninguno de los servicios financieros revisados en este capítulo muestran efectos estadísticamente significativos sobre el gasto en salud. Los controles sociodemográficos en general sugieren que, los hogares con jefes de mayor edad, con mayor número de mujeres, con niños menores de 12, con adultos mayores y con localización rural, son los que gastan más en salud; pero también se muestra que son los hogares que poseen jefes con mayor nivel de educación los que invierten más en este rubro de capital humano. Si bien los controles sociodemográficos tienen un comportamiento homogéneo en todo el país, los servicios financieros de crédito muestran efectos acentuados en la región sur; en especial, los créditos financiados por el trabajo u otras instituciones en esta región poseen casi 10 puntos porcentuales adicionales sobre el efecto positivo en el gasto en salud frente al promedio nacional, mientras en el norte y el centro este tipo de servicio financiero tienen efectos poco significativos.

Tabla 5
Efecto de los servicios financieros formales sobre el gasto en salud
Estimación MCO de hogares por regiones

Variables	Logaritmo del gasto en salud			
	(1) Nacional	(2) Norte	(3) Centro	(4) sur
Cuenta de depósitos	0.020 (0.018)	0.016 (0.031)	0.007 (0.028)	0.018 (0.036)
Tarjeta de crédito	0.074*** (0.024)	-0.021 (0.030)	0.089** (0.037)	0.103** (0.052)
Crédito del trabajo	0.097*** (0.024)	0.036 (0.042)	0.070* (0.039)	0.180*** (0.045)
Jefatura de hogar femenina	0.001 (0.017)	-0.005 (0.031)	0.030 (0.028)	-0.051 (0.036)
Edad del jefe de hogar	-0.009 (0.005)	-0.009* (0.005)	-0.003 (0.005)	0.003 (0.006)
Edad del jefe al cuadrado	0.001*** (0.000)	0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)	0.000 (0.000)
Educación del jefe de hogar	0.010*** (0.004)	0.009*** (0.004)	-0.004 (0.003)	0.005 (0.004)
Integrantes del hogar	-0.117*** (0.014)	-0.115*** (0.014)	-0.099*** (0.012)	-0.115*** (0.016)
Adultos mayores en el hogar	0.134*** (0.032)	0.134*** (0.032)	0.181*** (0.030)	0.204*** (0.038)
Niños en el hogar	0.100*** (0.018)	0.101*** (0.018)	0.089*** (0.017)	0.106*** (0.022)
Mujeres en el hogar	0.088***	0.088***	0.044***	0.068***

	(0.017)	(0.016)	(0.015)	(0.019)
Localización rural	0.215***	0.188***	0.177***	0.267***
	(0.060)	(0.029)	(0.025)	(0.033)
Constante	-5.080***	-5.080***	-4.946***	-4.998***
	(0.266)	(0.266)	(0.247)	(0.308)
Prueba F	709	259	276	174
Observaciones	38,765	13,224	15,891	9,650
R-cuadrado	0.1947	0.209	0.187	0.198

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Las estimaciones MCO sobre los determinantes del gasto en educación en la tabla 6 sugieren una relación negativa entre el conjunto de servicios financieros de ahorro y crédito y el gasto en educación de las familias. Si bien los efectos identificados poseen menos diferencia entre las regiones del país, la tenencia de cuentas de depósito se relaciona con menor gasto en educación entre 14 puntos porcentuales en el norte y hasta 24 puntos en el sur; la tenencia de tarjetas de crédito disminuye entre 10 y hasta cerca de 15 puntos porcentuales el gasto en educación; esto en menor proporción que la reducción por la tenencia de créditos por parte del trabajo, que alcanza efectos negativos de hasta 23% en el promedio nacional. Los efectos del crédito del trabajo varían poco entre regiones, pero los efectos negativos de la tenencia de tarjeta de crédito sobre el gasto en educación son menores en la región sur que en el centro y en el norte; en contraposición, los efectos negativos de la tenencia de cuenta de depósitos de ahorro son mayores en la región sur que en el norte y en el centro del país.

En cuanto al resto de las variables determinantes del gasto en educación de la tabla 6, sin importar la distribución regional, sobresalen los efectos del género femenino sobre la inversión en educación; en particular, cabe destacar que hogares encabezados por mujeres (jefatura femenina) gastan cerca de 11% más que aquellas familias en las que el jefe de hogar es hombre; de igual forma, el número

de mujeres en el hogar incrementa el gasto en educación, mientras que hogares rurales, con jefes de familia en edad avanzada y con niños menores de 12 años, gastan menos en educación que sus contrapartes. Al igual que ocurre con el gasto en salud, con los años de educación del jefe del hogar se incrementa el gasto en educación, lo que establece una clara relación de reproducción del capital humano de las familias. A diferencia de lo que ocurre con la salud, la revisión del gasto en educación bajo esta estrategia no aporta evidencia probatoria de la relación positiva entre servicios financieros y mejoras en el bienestar.

En general, las tablas 5 y 6 por MCO nos sugieren efectos de los servicios financieros formales en sentidos diferenciados cuando se trata de la salud y la educación de las familias mexicanas. En particular, los servicios de crédito como las tarjetas y los créditos por parte de las empresas representan incentivos para gastar más en salud; es decir, cumplen con el papel de suavización que sugiere la teoría, mientras las cuentas de depósitos de ahorro que se registran en la ENIGH no permiten evidenciar efectos sobre este rubro de consumo. Por otro lado, los tres servicios financieros formales revisados en este ejercicio se relacionan con menores niveles de gasto en educación. De igual forma, las tablas 5 y 6 permiten ver que los efectos identificados varían de región a región en el país; especialmente en la región sur los efectos positivos del crédito sobre la salud se acentúan, mientras los efectos negativos sobre el gasto en educación tienden a ser menores, mostrando que dadas las condiciones iniciales los procesos de inclusión financiera guiados por la tenencia de instrumentos son distintos según la región del país.

Tabla 6

Efecto de los servicios financieros formales sobre el gasto en educación
Estimación MCO de hogares por regiones

Variables	Logaritmo del gasto en educación			
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Nacional	Norte	Centro	sur

Cuenta de depósitos	-0.196***	-0.145***	-0.192***	-0.242***
	(0.016)	(0.027)	(0.023)	(0.033)
Tarjeta de crédito	-0.130***	-0.147***	-0.116***	-0.101**
	(0.021)	(0.035)	(0.031)	(0.048)
Crédito del trabajo	-0.232***	-0.220***	-0.220***	-0.226***
	(0.021)	(0.037)	(0.033)	(0.039)
Jefatura de hogar femenina	0.103***	0.111***	0.091***	0.108***
	(0.015)	(0.026)	(0.023)	(0.031)
Edad del jefe de hogar	0.012***	0.018***	0.009*	0.010
	(0.003)	(0.005)	(0.005)	(0.006)
Edad del jefe al cuadrado	-0.000***	-0.000***	-0.000**	-0.000
	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
Educación del jefe de hogar	0.018***	0.017***	0.022***	0.016***
	(0.002)	(0.003)	(0.003)	(0.004)
Integrantes del hogar	0.005	0.004	0.010	-0.003
	(0.006)	(0.011)	(0.009)	(0.013)
Adultos mayores en el hogar	0.031	0.013	0.034	0.055
	(0.029)	(0.046)	(0.040)	(0.055)
Niños en el hogar	-0.184***	-0.188***	-0.175***	-0.195***
	(0.015)	(0.027)	(0.024)	(0.033)
Mujeres en el hogar	0.030***	0.009	0.029**	0.063***
	(0.007)	(0.013)	(0.011)	(0.016)
Localización rural	-0.089***	-0.114***	-0.062***	-0.118***
	(0.013)	(0.029)	(0.025)	(0.033)
Constante	-3.173***	-2.895***	-3.277***	-2.834***
	(0.129)	(0.222)	(0.209)	(0.264)
Prueba F	1,223	399	472	294

Observaciones	32,122	11,290	13,451	7,381
R-cuadrado	0.3174	0.295	0.314	0.328

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Los resultados de las estimaciones MCO se verifican frente a modelos de determinantes del gasto en salud y en educación estimados por mínimos cuadrados bietápicos; en este ejercicio se usan como variables instrumentales de los servicios financieros el tamaño de localidad, el nivel de educación preparatoria de los jefes de hogar, el número de adultos mayores en el hogar y la tenencia de internet como representantes de la educación, las capacidades financieras y del acceso a servicios. Las tablas 7 y 8 de este apartado presentan los resultados de las estimaciones de los determinantes utilizando el mismo conjunto de variables de control de las tablas 5 y 6.

Tabla 7

Efecto de los servicios financieros formales sobre el gasto en salud
Estimación VI-MC2E de hogares por regiones

Variables	Logaritmo del gasto en salud			
	(1) Nacional	(2) Norte	(3) Centro	(4) sur
Cuenta de depósitos	0.943*** (0.134)	1.025*** (0.231)	1.064*** (0.202)	0.891*** (0.248)
Tarjeta de crédito	1.751*** (0.235)	1.890*** (0.420)	1.560*** (0.294)	1.833*** (0.554)
Crédito del trabajo	2.678*** (0.424)	3.029*** (0.819)	3.695*** (0.885)	1.353*** (0.398)

Variables instrumentales: Tamaño de localidad; jefe de hogar con nivel de

educación preparatoria o más; número de
adultos mayores; internet

Instrumentos débiles (Prueba F)	240.47	32.45	107.37	70.76
Sobreidentificación (Sargan p-valor)	0.2877	0.8055	0.9062	0.0481
Prueba F	736	280	295	197
Observaciones	38,765	13,224	15,891	9,650
R-cuadrado	0.135	0.136	0.105	0.143

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ Errores estándar robustos en paréntesis. Las cuatro regresiones son controladas por sexo, edad y años de educación del jefe de familia, número de integrantes del hogar, adultos mayores, niños menores de 12, número de mujeres y localización urbano/rural.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Los resultados de la tabla 7 confirman los efectos de las estimaciones por MCO de la tabla 5; se observan efectos positivos de la tenencia de cuentas de depósitos, tarjetas de crédito o créditos por parte del trabajo sobre el monto del gasto en salud de los hogares mexicanos; por variables instrumentales se estiman efectos entre el 90% y hasta más del 300% de incremento en el gasto en salud por el uso de los instrumentos financieros; sin embargo, recordemos la sensibilidad del estimador de variables instrumentales a la calidad de los instrumentos que estamos utilizando, por lo que más allá de la magnitud, nos limitamos a confirmar la direccionalidad de los efectos encontrados por MCO. Con respecto a las pruebas de los instrumentos en todos los casos, tanto para las tres regiones como para el promedio nacional, la prueba F de instrumentos débiles permite rechazar la hipótesis nula de que los instrumentos están débilmente correlacionados con los servicios financieros; en el caso de la prueba de Sargan de sobreidentificación, los valores indican que no se rechaza la hipótesis de que los instrumentos fueron bien excluidos de la explicación del gasto en salud; en este sentido, los instrumentos usados dada la disponibilidad de información en la encuesta cumplen con las condiciones necesarias para la

estimación.

Tabla 8
Efecto de los servicios financieros formales sobre el gasto en educación
Estimación VI-MC2E de hogares por regiones

Variables	Logaritmo del gasto en educación			
	(1) Nacional	(2) Norte	(3) Centro	(4) sur
Cuenta de depósitos	-0.509** (0.237)	-0.159 (0.431)	-0.135 (0.289)	-0.808 (0.580)
Tarjeta de crédito	-0.328** (0.154)	-0.164 (0.267)	-0.127 (0.213)	-0.910** (0.407)
Crédito del trabajo	-1.518* (0.910)	1.230 (0.874)	1.368 (2.103)	-1.402** (0.675)
Variables instrumentales:	Tamaño de localidad; jefe de hogar con nivel de educación preparatoria o más; número de adultos mayores; internet			
Instrumentos débiles (Prueba F)	136.76	36.40	58.81	19.88
Sobreidentificación (Sargan p-valor)	0.0285	0.1124	0.4611	0.7981
Prueba F	1,343	429	549	308
Observaciones	32,122	11,290	13,451	7,381
R-cuadrado	0.314	0.295	0.311	0.296

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Errores estándar robustos en paréntesis. Las cuatro regresiones son controladas por sexo, edad y años de educación del jefe de familia, número de integrantes del hogar, adultos mayores, niños menores de 12, número de mujeres y localización urbano/rural.

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2018

Acerca de los efectos de los servicios financieros formales sobre el gasto en educación, la tabla 8 muestra que, si bien por regiones los resultados no logran ser significativos de manera concluyente, en el promedio nacional se confirman los efectos negativos de las cuentas de depósitos de ahorro, las tarjetas de crédito y el crédito de las empresas sobre dicho rubro de capital humano, tal y como lo habían sugerido las estimaciones por MCO de la tabla 6. La tenencia de los tres servicios financieros revisados en este capítulo reduce entre casi 33% y hasta más de 150% en el promedio nacional el gasto en educación de los hogares; sin embargo, al igual que en el caso del gasto en salud, lo que se destaca de la estimación es la dirección del efecto tomando en cuenta el sesgo derivado de la estimación por variables instrumentales. Las pruebas sobre los instrumentos indican que se rechaza con la prueba F la hipótesis nula sobre una correlación débil entre los instrumentos y los servicios financieros, y que no se rechaza la hipótesis de que dichas variables instrumentales son bien excluidas en la explicación del gasto en educación.

5. Conclusiones

El análisis descriptivo sobre el uso y monto promedio de las cuentas de depósito, tarjeta de crédito y créditos de trabajo identificó que no existe un patrón geográfico homogéneo transversal para los tres servicios financieros. Sin embargo, es posible notar un comportamiento diferenciado tanto en la tenencia de servicios como en las características sociodemográficas por regiones: las entidades del sur y centro del país reportan un uso más alto de cuentas de depósitos que las del norte, probablemente a consecuencia de los procesos de bancarización acelerados inducidos por el pago de programas sociales; en contraste, las entidades de la región sur reportan la menor tenencia de tarjetas de crédito. Por otro lado, las variables sociodemográficas analizadas mostraron que los hogares de la región sur presentan un mayor rezago frente a las del norte y centro, en particular en la acumulación de capital humano y en el acceso a las TIC.

Se utilizaron variables instrumentales para estimar modelos de los determinantes

de los gastos en salud y educación, los cuales identificaron efectos diferenciados de los servicios financieros sobre la inversión en capital humano; mientras el crédito incrementa el gasto en salud, el conjunto de depósitos de ahorro y crédito se vincula con un menor gasto en educación.

Los resultados señalan que la magnitud de los efectos varía significativamente entre las regiones norte, centro y sur del país, mostrando la relevancia de las condiciones iniciales de cada territorio sobre el proceso de inclusión: en particular, en la región sur los efectos positivos del crédito sobre la salud se acentúan, mientras los efectos negativos sobre el gasto en educación tienden a ser menores.

Finalmente, los controles sociodemográficos utilizados sugieren que son los hogares con jefes de mayor edad y mayor educación, mayor número de mujeres, con niños menores de 12, con adultos mayores y con localización rural, los que gastan más en salud; en tanto que en el caso del gasto en educación se identificaron efectos de género significativos, dado que son los hogares encabezados por mujeres o con mayor número de ellas los que invierten más en este rubro de capital humano, aunque también se encontró que el nivel educativo del jefe del hogar tiene efectos significativos sobre este gasto.

Bibliografía

- Adams, D. W (1988). The conundrum of successful credit projects in floundering rural financial markets. *Economic Development and Cultural Change*, 36(2), 355-367.
- Adams, D. W. y Von Pischke, J. D. (1992). Microenterprise credit programs: Dejavu. *World development*, 20(10), 1463-1470.
- Alberro, I., Henderson, R. M., y Yúnez-Naude, A. (2016). *Inclusión financiera en México : retos y perspectivas*. Ciudad de México: El Colegio de México.
Retrieved from
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=e000xww&AN=1515149&lang=es&site=ehost-live&scope=site&custid=s4768653>
- Alessie, R., y J. De Ree (2009), "Explaining the Hump in Life Cycle Consumption

- Profiles”, *De Economist*, vol. 157, núm. 1, pp. 107-120.
- Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) (2011). *Measuring financial inclusion. Core set of financial inclusion indicators*. Bangkok: Autor.
- “Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018 ” *La inclusión financiera como mecanismo para la reducción de la pobreza : nueva evidencia sobre México* . (2018). 1–27.
- Angrist, J. (2001). Estimation of limited dependent variable models with dummy endogenous regressors. *Journal of Business & Economic Statistics*, 19(1), 2-28. <https://doi.org/10.3386/t0248>
- Aportela, F. (1999). *Effects of financial access on savings by low-income people*. Ciudad de México: Banco de México.
- Aportela, F. (2001). *Efectos de los ciclos de crédito en México sobre la tasa de ahorro de los hogares, 1989-1996* [Documento de investigación 2001-03]. Ciudad de México: Banco de México.
- Attanasio O., y M. Szekely (2000), “Household Saving in Developing Countries- Inequality, Demographics and All That: How Different are Latin America and South-East Asia?”, documento de trabajo núm. 427, BID, Washington, D. C.
- Attanasio, O. y Székely, M. (1999). Ahorro de los hogares y distribución del ingreso en México. *Economía Mexicana*, 3(2), 267-338.
- Attanasio, O. y G. Weber (2010), “Consumption and Saving: Models of Intertemporal Allocation and Their Implications for Public Policy”, *Journal of Economic Literature*, vol. 48, núm. 1, pp. 693-751.
- Banerjee, A. V, y Duflo, E. (2011). Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. *Mit*, 376.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. y Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27-49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>

- Becker, G. y Tomes, N. (1986). Human capital and the rise and fall of families. *Journal of Labor Economics*, 4(3), 1-39. <https://doi.org/10.1086/298118>
- Bernal, P. (2007). *Ahorro, crédito y acumulación de activos en los hogares pobres de México*.
- Browning, M., y A. Lusardi (1996), "Household Saving: Micro Theories and Micro Facts", *Journal of Economic Literature*, vol. 34, núm. 4, pp. 1797-1855.
- Campos R. y Meléndez, A. (2013). Una estimación semiparamétrica de las pautas de consumo e ingreso a lo largo del ciclo de vida para México. *El Trimestre Económico*, 80(4), 805-840. <https://doi.org/10.20430/ete.v80i320.104>
- Castellanos, S. y Garrido, D. (2010). Tenencia y uso de tarjetas de crédito en México. Un análisis de los datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2006. *El Trimestre Económico*, 77(1), 69-103. <https://doi.org/10.20430/ete.v77i305.435>
- Ceballos, O., y Santiago, L. (2019). Efectos de las tarjetas de crédito en la estructura de consumo y la desigualdad de los hogares mexicanos. *Revista Finanzas y Política Económica*, 11(2), 299-320.
- Ceballos, O. (2018). Perfiles de ahorro y pago de deuda en el ciclo de vida de los hogares mexicanos. *El Trimestre Económico*, 85(2), 311-339. <https://doi.org/10.20430/ete.v85i338.322>
- Cotler, P. y Rodríguez-Oreggia, E. (2009). Acceso y participación de los sectores populares mexicanos en el mercado formal de crédito. *El Trimestre Económico*, 76(3), 671-693. <https://doi.org/10.20430/ete.v76i303.493>
- Cull, R., Ehrbeck, T. y Hole, N. (2014). La inclusión financiera y el desarrollo: Pruebas recientes de su impacto. *Enfoques CGAP*, N.o 92(Abril 2014), 1–11.
- De Ollóqui, F., Andrade, G., y Herrera, D. (2015). *Inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Coyuntura actual y desafíos para los próximos años*. 1–36.
- Demirgüç-Kunt, A. y Klapper, L. (2012). *Measuring financial inclusion: The global*

- Findex Database* [World Bank Policy Research Paper 6025]. Washington: Banco Mundial. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-6025>
- Demirgüç-Kunt, A., Beck, T. y Honohan, P. (2008). *Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access*. Washington: Banco Mundial. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7291-3>
- Demirgüç-Kunt, A. y Levine, R. (2009), “Finance and Inequality: Theory and Evidence”, *Annual Review of Financial Economics*, vol. 1, núm. 1, pp. 287-318.
- Engel, J. y Kneip, A. (1996). Recent approaches to estimating Engel curves. *Journal of Economics*, 63(2), 187-212. <https://doi.org/10.1007/bf01258672>
- Friedman, M. (1957). *A theory of the consumption function*. Princeton: Universidad de Princeton.
- Galor, O. y Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. *The Review of Economic Studies*, 60(1), 35-52. <https://doi.org/10.2307/2297811>
- Guízar, I., González Vega, C., & Miranda, M. J. (2016). Un análisis numérico de inclusión financiera y pobreza. *Econoquantum*, 12(2), 7–24. <https://doi.org/10.18381/eq.v12i2.4857>
- Heimann, U., Navarrete Luna, J., O’Keefe, M., Vaca Domínguez, B. y Zapata Álvarez, G. (2009). Mapa estratégico de inclusión financiera: una herramienta de trabajo. *Conferencia Interamericana de Seguridad Social*, Universidad Iberoamericana.
- Holzmann, R., Mulaj, F. y Perotti, V. (2013). *Financial capability in low and middle-income countries*. Washington: Banco Mundial.
- Levine, R. (2005). *Finance and growth: Theory and evidence* [NBER Working Paper 10766]. <https://doi.org/10.3386/w10766> Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w10766>
- Liquitaya, J. (2011), “La teoría del ingreso permanente: un análisis empírico”,

Revista Nicolaita de Estudios Económicos, 6(1), pp. 33-61

- Medina, F. (1998). *El ingreso y el gasto como medida del bienestar de los hogares: una evaluación estadística*. Santiago de Chile: Cepal.
- Mejía, I. (2008). Ciclo de vida económico en México. En *La situación demográfica de México 2008*. Santiago de Chile: Cepal.
- Meza Martínez, J. C. (2017). La teoría del ciclo vital de Franco Modigliani: enfoque en los salarios de los trabajadores colombianos. *Questionar: Investigación Específica*, 5(1), 131–140. <https://doi.org/10.29097/23461098.106>
- Modigliani, F. y Brumberg, R. (1954). Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. En K. Kurihara (Ed.), *Post keynesian economics* (pp. 388-436). New Brunswick: Universidad Rutgers.
- Morfín, M. (2009). *Banca de desarrollo y el apoyo al acceso (México)*. Santiago de Chile: Cepal.
- Muñoz, M. (2004). Determinantes del ingreso y del gasto corriente de los hogares. *Revista de Economía Institucional*, 6(10), pp. 183-199
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2015). *How's life 2015? Measuring well-being*. París: Autor.
- Palma, A., Quesada, J. y Del Río, M. (2019). Panorama de Inclusión Financiera. *Comisión Nacional Bancaria y de Valores*, 53(9), 1–120. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pleite, F. M. C., Soriano, A. M. M., Eid, M. y Sueiras, J. C. (2016). Inclusión financiera en el ámbito rural mediante cajas de ahorro. Estudio de una experiencia en México. *Perfiles Latinoamericanos*, 24(48), 185–211. <https://doi.org/10.18504/pl2448-008-2016>
- Ponce, A., Seira, E. y Zamarripa, G. (2017). Borrowing on the wrong credit card? Evidence from Mexico. *American Economic Review*, 107(4), 1335-1361. <https://doi.org/10.1257/aer.20120273>

- Roa, M. (2013). *Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: acceso, uso y calidad* Ciudad de México: CEMLA.
- Rodríguez, A. y Dorantes, P. (2016). La reciente reforma financiera en México: transformaciones y perspectivas. *Economía UNAM*, 13(37), 89-106.
- Rodríguez, S., y Riaño, F. (2016). Determinantes del acceso a los productos financieros en los hogares colombianos. *Estudios Gerenciales*, 32(138), 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.estger.2015.11.004>
- Sandoval-Hernandez, J. (2013). *Household saving behavior in Mexico: evidence from cross-sectional analysis and synthetic panels*. Charleston: College of Charleston.
- Van Gameren, E. (2008). Labor force participation of Mexican elderly: The importance of health. *Estudios Económicos*, 23(1), 89-127
- Villagómez, A. y Zamudio, A. (2000). *A dynamic analysis of household decision-making: the Mexican*. Washington: BID.
- Villarreal, F. (2014). *Financial services and household inequality in Mexico* [Munich MPRA Paper 57075]. Recuperado de <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/57075/>
- Vonderlack, R. y Schreiner, M. (2001). *Mujeres, microfinanzas, y ahorro: lecciones y propuestas*. San Luis: Universidad Washington en San Luis.
- Williamson, J. (2003). From Reform Agenda to Damaged Brand Name. *Finance & Development*, 10–13.
<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:From+Reform+Agenda+to+Damaged+Brand+Name#1>
- Woodruff C. y Martínez, J. (2009). Evolución de los cambios en el acceso a servicios financieros de los hogares en México: un análisis de la encuesta de panel Bansefi/Sagarpa 2004-2007. *Bienestar y Política Social*, 5(1), 77-117.
- Williamson, J. (2003). From Reform Agenda to Damaged Brand Name. *Finance & Development*, 10–13.
<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:From+Refor>

m+Agenda+to+Damaged+Brand+Name#1